

Señor
JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
 E. S. D

WALBERTO PALOMINO VALENZUELA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con C.C. No. 16.702.277 expedida en Cali, abogado titulado y en ejercicio, con T.P. Nro. 60.720 del C.S.J., como apoderado especial de los señores **JAIME ROMERO**, identificado con C.C. No. 2.530.107, **AMPARO ARAMBURO DE ROMERO**, identificada con C.C. No. 29.358.590, en calidad de en su calidad de progenitores, **KAREN LIZETH ROMERO PALACIOS**, identificada con C.C. No. 1.144.169.381, en su calidad de hija, **YEIMY ROMERO ARAMBURO**, identificada con C.C. No. 66.879.563, y **CLAUDIA PATRICIA ROMERO ARAMBURO**, identificada con C.C. No. 66.706.535, en calidad de hermanas, todos mayores de edad, vecinos de Cali, por medio del presente escrito, ante usted con todo respeto, me permito promover **PROCESO DE REPARACION DIRECTA** en contra de **LA NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)-**, respectivamente representado legalmente por el señor Ministro de Justicia, Dr. **JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA**, mayor de edad, vecino de Bogotá, y por el señor Director Nacional del INPEC **LUIS RAMIREZ ARAGON**, mayor de edad, vecino de Bogotá o por quien haga sus veces, para la reclamación de la indemnización por los perjuicios de diversa índole que están soportando mis mandantes con la **PERDIDA DE OPORTUNIDAD** del señor **JAIME ROMERO ARAMBURO**, quien en vida se identificó con la C.C. No. 16.989.918, fallecido el día 24 de diciembre de 2014, cuando se encontraba privado de la libertad, bajo la figura de la Prisión Domiciliaria, hecho que es consecuencia de las fallas en que incurrió el INPEC en la prestación del servicio de salud.

CAPITULO I. DESIGNACION DE LAS PARTES

1. DEMANDANTES

1.1. **JAIME ROMERO**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con C.C. No. 2.530.

1.2. **AMPARO ARAMBURO DE ROMERO**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con C.C. No. 29.358.

1.3. **KAREN LIZETH ROMERO PALACIOS**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con C.C. No. 1.144.169.381

1.4. **YEIMY ROMERO ARAMBURO**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con C.C. No. 66.879.

1.5. **CLAUDIA PATRICIA ROMERO ARAMBURO**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con C.C. No. 66.706.

2. DEMANDADOS

LA NACION –MINISTERIO DE JUSTICIA- representado legalmente por el señor Ministro de Justicia, Dr. **JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA**, mayor de edad, vecino de Bogotá, o por quien haga sus veces.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)-, representado legalmente por el señor Director General, Sr. **LUIS RAMIREZ ARAGON**, mayor de edad, vecino de Bogotá o por quien haga sus veces.

CAPITULO II. HECHOS Y OMISIONES

1. El señor JAIME ROMERO ARAMBURO fue condenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro –Valle del Cauca- a la pena principal de 40 meses de prisión, mediante sentencia del 22 de enero de 2014.

2. La ejecución de la sentencia correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, ordenando su encarcelación en la Cárcel de Villa Hermosa de esta ciudad de Cali.

3. Según Dictamen Médico Forense de Estado de Salud practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses D.R. SUROCCIDENTE al señor ROMERO ARAMBURO, el día 20 de junio de 2014, en el título denominado “DISCUSION” se consigna lo siguiente:

*“Se trata de un hombre de 46 años, con antecedentes de hipertensión arterial esencial de difícil manejo, infarto agudo del miocardio hace dos años y angioma cavernoso protuberancial, quien ha presentado episodios persistentes de síncope y que refiere pérdida de control de esfínteres de cuatro meses de evolución. **Refiere no estar recibiendo de manera regular el tratamiento instaurado.**”*

En el momento de la valoración médica actual, se encuentra con niveles tensionales muy elevados,....”

En la CONCLUSION hace la siguiente recomendación:

“Sin embargo se le debe GARATIZAR VALORACION PRIOROTARIA POR MEDICINA INTERNA. EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS MEDICAMENTOS ORDENADOS POR LOS ESPECIALISTAS TRATANTES, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO Estricto DE LOS CONTROLES MEDICOS ESTABLECIDOS POR ELLOS.”

4. El día 17 de septiembre de 2014, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, en forma oficiosa decide conceder la Prisión Domiciliaria al señor ROMERO ARAMBURO, quien fallece el día 24 de diciembre de 2014 tras haber sido internado en la Clínica Rey David de la ciudad de Cali desde el día 18-12-2014.

5. El INPEC ni durante la ejecución de la pena intramural, ni durante la domiciliaria prestó al señor ROMERO ARAMBURO los cuidados médicos necesarios para tratar sus afecciones de salud, ni tuvo en cuenta las recomendaciones del Dictamen Médico Forense de Estado de Salud

practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses D.R. SUROCCIDENTE al señor ROMERO ARAMBURO el día 20 de junio de 2014; lo que hizo que el funcionamiento del organismo del señor ROMERO ARAMBURO se fuera deteriorando hasta llegar a producir su deceso, como efectivamente ocurrió el 24 de diciembre de 2016.

6. Lo consignado en el hecho anterior encuentra pleno respaldo en el dictamen señalado, en el que se consigna:

“Refiere no estar recibiendo de manera regular el tratamiento instaurado.”

Igualmente encuentra respaldo en las constantes solicitudes que hiciera el Dr. PEDRO NEL MARTINEZ P., entonces defensor del señor ROMERO ARAMBURO al INPEC para que le prestaran los servicios médicos requeridos.

7. El INPEC al ser negligente en la prestación del servicio de salud al señor JAIME ROMERO ARAMBURO, le privó de la oportunidad para que él estabilizara o recuperara su salud; con un desenlace final fatal, su muerte.

8. Si bien es cierto el señor JAIME ROMERO ARAMBURO tenía los antecedentes de salud de que se ha hablado en hechos anteriores, su vida y su salud, antes de ser privado de la libertad era estable y normal, como quiera que en libertad tenía los controles médicos y las medicinas que le permitían tener controladas sus enfermedades y llevar una vida normal; pero como él mismo lo relata dentro del poder que otorga a su defensor, una vez privado de la libertad su salud se volvió un caos, pues no volvió a tener los controles y no le dejaban entrar los medicamentos; lo que determinó la pérdida de la oportunidad para que el señor JAIME ROMERO ARAMBURO estabilizara o recuperara su salud, con su consecuencial deceso, lo que constituye un **DAÑO ANTIJURIDICO** que debe ser indemnizado con apego a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

9. El señor JAIME ROMERO ARAMBURO era un buen hijo, buen padre de familia, buen hermano, llevando una estrecha relación afectiva con sus progenitores, sus descendientes y sus hermanas, demandantes dentro de este proceso, quienes padecieron con la negligencia del INPEC para brindarle la atención adecuada para el estado de salud en que se encontraba, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo hasta llevarle a la muerte.

CAPITULO III. PRETENSIONES

1. Que se declare a **LA NACION –MINISTERIO DE JUSTICIA- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)-** administrativamente responsable de la pérdida de la oportunidad para que el señor **JAIME ROMERO ARAMBURO** estabilizara o recuperara su salud, con su consecuencial deceso, hecho que es consecuencia de las fallas en que incurrió el ente demandado en la prestación de sus servicios.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior se hagan las siguientes condenas:

2.1. Se condene a **LA NACION –MINISTERIO DE JUSTICIA- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)** a pagar a favor de los

demandantes, una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria del fallo, como indemnización por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad para que el señor JAIME ROMERO ARAMBURO estabilizara o recuperara su salud, con su consecuencial deceso.

2.1.1. **JAIME ROMERO**, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2.1.2. **AMPARO ARAMBURO DE ROMERO**, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2.1.3. **KAREN LIZETH ROMERO PALACIOS**, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2.1.4. **YEIMY ROMERO ARAMBURO**, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

2.1.5. **CLAUDIA PATRICIA ROMERO ARAMBURO**, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a **LA NACION -MINISTERIO DE JUSTICIA- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)** a pagar a favor de los demandantes, una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria del fallo, como indemnización los **PERJUICIOS MORALES** que están sufriendo aquellos en razón a la pérdida de la oportunidad para que el señor JAIME ROMERO ARAMBURO estabilizara o recuperara su salud, con su consecuencial deceso, imputable al ente demandado:

2.2.1. **JAIME ROMERO**, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2.2.2. **AMPARO ARAMBURO DE ROMERO**, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2.2.3. **KAREN LIZETH ROMERO PALACIOS**, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2.2.4. **YEIMY ROMERO ARAMBURO**, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

2.2.5. **CLAUDIA PATRICIA ROMERO ARAMBURO**, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

2.3. Que se condene a la entidad demandada al pago de intereses moratorios¹ sobre todas las sumas reconocidas por concepto de perjuicios

¹ El reconocimiento de intereses moratorios sobre una suma que ha sido indexada no supone imponer al deudor dos veces una misma carga, ni satisfacer, para el acreedor, dos veces el mismo derecho. Jurisprudencia y Doctrina. LEGIS S.A. Bogotá D.C., número 346, octubre de 2000, página 1945 y ss, Consejo de Estado. Sección Tercera, auto del 3 de agosto de 2000. expediente 14 368. Consejero Ponente, Dr. Alier Eduardo Hernández Enriquez.

morales a partir de la ejecutoria del fallo, hasta cuando se efectúe el pago de las mencionadas sumas de dinero.

2.4. Que se condene en costas a la entidad demandada, incluidas las agencias en derecho., de acuerdo a lo establecido en el artículo 188 C.P.A.C.A

CAPITULO IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. NORMAS

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes artículos de nuestra Carta Política, a saber: 2 (Fines del Estado), 6 (Principio de responsabilidad jurídica), **90** (Responsabilidad del Estado).

2. TITULO DE IMPUTACION

Sin duda, los títulos de imputación bajo los cuales se debe analizar el caso que ha dado origen a esta contienda, son los llamados por la jurisprudencia y por la doctrina **responsabilidad por falla del servicio**, y **responsabilidad derivada de la pérdida de oportunidad**.

2.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

2.1.1. LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LAS FALLAS DE LA ADMINISTRACION:

EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) obró en forma negligente al no brindar al señor JAIME ROMERO ARAMBURO la atención médica requerida para sus padecimientos de salud estando obligado a ello, ni atendió las recomendaciones consignadas en el Dictamen Médico Forense de Estado de Salud practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses D.R. SUROCCIDENTE al señor ROMERO ARAMBURO, el día 20 de junio de 2014, el cual, en la CONCLUSION hace la siguiente recomendación:

“Sin embargo se le debe GARANTIZAR VALORACION PRIOROTARIA POR MEDICINA INTERNA. EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS MEDICAMENTOS ORDENADOS POR LOS ESPECIALISTAS TRATANTES. ASI COMO EL CUMPLIMIENTO Estricto DE LOS CONTROLES MEDICOS ESTABLECIDOS POR ELLOS.”

Tampoco atendió las solicitudes del entonces abogado defensor del Sr. ROMERO ARAMBURO; todo lo cual constituye la pérdida de oportunidad para que el señor JAIME ROMERO ARAMBURO estabilizara o recuperara su salud, con su consecuencial deceso.

En asunto similar, el Honorable Consejo de Estado, en fallo de agosto veinticinco (25) de dos mil once (2011), con **Radicación No. 250002326000199703994 – 01 (19.718)**, con ponencia del H. Magistrado, Dr. **Mauricio Fajardo Gómez**, se pronunció de la siguiente manera:

“En cuanto al otro punto: ¿la negligencia administrativa fue causa de la pérdida de “chance” u oportunidad para la recuperación del paciente?”.

Para la Sala no es claro que aún si la Administración hubiera actuado con diligencia el señor Franklin habría recuperado su salud; pero si le es claro, con criterio de justicia, que si el demandado hubiese obrado con diligencia y cuidado no le habría hecho perder al paciente el chance u oportunidad de recuperarse”.

La jurisprudencia ya trató antes ese punto. En sentencia dictada el día 26 de abril de 1999 se dijo:

“Si bien es cierto que no existe certeza en cuanto a que de haberse realizado un tratamiento oportuno el paciente no hubiera muerto pues nunca se tuvo un diagnóstico definitivo de la enfermedad que padecía, sí lo es en cuanto a que el retardo de la entidad le restó oportunidades de sobrevivir. Se trata en este caso de lo que la doctrina ha considerado como una ‘pérdida de una oportunidad’. Al respecto dice Ricardo de Angel Yaguez:

‘Es particularmente interesante el caso sobre el que tanto ha trabajado la doctrina francesa, esto es, el denominado la perte d’une chance, que se podría traducir como ‘pérdida de una oportunidad’.

‘CHABAS ha hecho una reciente recapitulación del estado de la cuestión en este punto, poniendo, junto a ejemplos extraídos de la responsabilidad médica (donde esta figura encuentra su más frecuente manifestación), otros como los siguientes: un abogado, por negligencia no comparece en un recurso y pierde para su cliente las oportunidades que éste tenía de ganar el juicio; un automovilista, al causar lesiones por su culpa a una joven, le hace perder la ocasión que ésta tenía de participar en unas pruebas para la selección de azafatas.

‘Este autor señala que en estos casos los rasgos comunes del problema son los siguientes: 1. Una culpa del agente. 2. Una ocasión perdida (ganar el juicio, obtención del puesto de azafata), que podía ser el perjuicio. 3. Una ausencia de prueba de la relación de causalidad entre la pérdida de la ocasión y la culpa, porque por definición la ocasión era aleatoria’. La desaparición de esa oportunidad puede ser debida a causas naturales o favorecidas por terceros, si bien no se sabrá nunca si es la culpa del causante del daño la que ha hecho perderla: sin esa culpa, la ocasión podría haberse perdido también. Por tanto, la culpa del

² Nota no incluida en la sentencia citada. En criterio de la Sala, este tercer elemento al cual hace alusión la referencia doctrinal efectuada en el fallo citado —“Una ausencia de prueba de la relación de causalidad entre la pérdida de la ocasión y la culpa”— no se corresponde con la naturaleza y alcances de la noción de pérdida de oportunidad que la Sala prohija ni con los parámetros que para el análisis de la responsabilidad del Estado consagra el artículo 90 de la Constitución Política, pues dicho tercer elemento autorizaría que se condene al demandado a indemnizar los perjuicios derivados de una pérdida de oportunidad, aún cuando en el proceso no se haya demostrado que este daño resulta atribuible a la acción o a la omisión del accionado en otros términos, se avalaría la imposición de condenas sin que se haya demostrado la causalidad, conclusión a todas luces contraria al tipo de examen que debe acometerse en el derecho de daños a fin de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad de quien se señala como agente causante del perjuicio. El razonamiento efectuado por la Sala inmediatamente a continuación, en el propio pronunciamiento citado, pone de presente que la relación causal entre la falla en el servicio y la pérdida de la oportunidad de mejoría o de curación, si debe estar demostrada y que es una relación causal diferente a la que debía demostrarse —y de hecho, en ese proceso no fue posible acreditar— entre dicha falla y la muerte del paciente

agente no es una condición sine qua non de la frustración del resultado esperado.

En el terreno de la Medicina el autor cita el caso de una sentencia francesa. Una mujer sufría hemorragia de matriz. El médico consultado no diagnostica un cáncer, a pesar de datos clínicos bastante claros. Cuando la paciente, por fin, consulta a un especialista, es demasiado tarde: el cáncer de útero ha llegado a su estado final y la enferma muere. No se puede decir que el primer médico haya matado a la enferma. Podría, incluso tratada a tiempo, haber muerto igualmente. Si se considera que el perjuicio es la muerte, no se puede decir que la culpa del médico haya sido una condición sine qua non de la muerte. Pero si se observa que la paciente ha perdido ocasiones de sobrevivir, la culpa médica ha hecho perder esas ocasiones. El mismo razonamiento se puede aplicar a un individuo herido, al que una buena terapia habría impedido quedar inválido. El médico no aplica o aplica mal aquella terapéutica, por lo que la invalidez no puede evitarse. El médico no ha hecho que el paciente se invalide, sólo le ha hecho perder ocasiones de no serlo'. (RICARDO DE ANGEL YAGUEZ. Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño). Madrid, Ed. Civitas S.A., 1995, págs. 83-84).

En conclusión la falla del servicio de la entidad demandada que consistió en la falta de diligencia para realizar un diagnóstico oportuno de la enfermedad sufrida por el paciente e iniciar de manera temprana el tratamiento adecuado, implicó para éste la pérdida de la oportunidad de curación y de sobrevivir³).

La pérdida por parte de Franklin, de esa oportunidad para recuperarse si tiene nexo directo con la falencia administrativa.

El elemento de responsabilidad, nexo de causalidad, se estableció indiciariamente: ...⁴ (negritas en el texto original; subrayas fuera de él).

³ Nota original de la sentencia citada: Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 10.755. Actor Elizabeth Bandera Pinzón. Demandado: I.S.S.

⁴ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000. Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, Radicación número: 12548. Los indicios que en el fallo citado fueron tenidos en cuenta para entender acreditada la relación causal entre la falla en el servicio y la pérdida de oportunidad, fueron los siguientes:

- Al recibo del paciente por parte del Hospital San Jorge no se dejaron anotaciones en la hoja clínica relativas a que hubiese llegado en estado terminal o de pre muerte; de ser así se habría dejado constancia de ello en la historia clínica, se habría prevenido de tal circunstancia al paciente y a sus familiares, y no se habrían hecho indicaciones médicas de evaluación por el neurólogo y la orden de practicar una escanografía.

- El hematoma subdural que se encontró en la necropsia, según dicho del médico testigo, fue relativamente "extenso en altura, en longitud, pero no en espesor, que es este último el que más deterioro produce. Las otras dos causas como son el edema y la hemorragia subaracnoidea en ciertos momentos puede producir complicaciones muy severas e irreversibles pero de todas formas siendo un hematoma subdural agudo no se podía garantizar que con la cirugía el paciente se salvara, porque la mayoría de los hematomas subdurales agudos se mueren con o sin cirugía".

- Se constituye en indicio grave en contra del demandado el hecho relativo a que el transcurso del tiempo en el paciente, con trauma craneoencefálico, sin recibir atención, la "evolución de la comprensión que a mayor sea el tiempo mayor complicaciones va a ocasionar" y eleva el riesgo; así lo indicó el declarante médico".

2.2. EL DAÑO QUE CONFIGURA LA LESION O PERTURBACION DEL BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO:

2.2.1. EL DAÑO MATERIAL:

En casos como el presente, el H. Consejo de Estado en el fallo cuyos apartes se transcribieron en precedencia señaló:

Llama la atención, de todos modos, que en el referido fallo, a pesar de dejarse claro que se condena a reparar la pérdida de oportunidad y no la muerte del paciente, posteriormente, al abordar el tema de los perjuicios, se intitula el acápite correspondiente del siguiente modo:

"G. Perjuicios morales por la muerte de Frankil Carmona Montoya" (énfasis añadido).

Ello resulta más llamativo aún si se tiene en cuenta que la indemnización se fija en la sentencia de manera proporcional respecto de la que hubiere procedido en el evento de haberse dispuesto la reparación por el deceso de la víctima directa:

"En lo que atañe con la fijación de la indemnización la Sala estima que la indicada por el Tribunal no es proporcional a la realidad de los hechos, pues se sabe que el paciente ingresó con un trauma craneo encefálico, ocasionado en un accidente de moto, trauma respecto del cual se desconoce, a ciencia cierta, si su tratamiento sería exitoso. Sin embargo como las irregularidades administrativas, que fueron varias y graves, condujeron a la pérdida de una oportunidad de chance para la recuperación del paciente.

Por lo tanto se modificará la condena impuesta al demandado; se reducirá al 60% de lo fijado por el a quo".

También resulta llamativo que en la sentencia no se explicita si la reducción en el porcentaje referido encuentra apoyatura en datos estadísticos consignados en alguna prueba pericial o en la literatura especializada o si se trata de una determinación fundada en la equidad.

Algo similar ocurre en el pronunciamiento que se cita a continuación, en el cual la conceptualización respecto de la pérdida de oportunidad se reitera, en idénticos términos a los transcritos y se reduce la condena ordenada por el a quo en un 50%, sin que se explicita si ello obedece a la proporción que se deriva de las probabilidades de sobrevivida de conformidad con la literatura médica, con alguna experticia técnica o si se trata de una valoración en equidad; en dicha sentencia, además, la Sala expresó lo siguiente:

"La Sala desconoce el grado de dolencia cardíaca de la paciente y por lo mismo ignora, por la falta de conocimiento científico médico, si en el evento de que se le hubiese hospitalizado aquella hubiese sobrevivido, pero lo que sí conoce es que está probado que la omisión administrativa, en hospitalizar la paciente, le frustró la oportunidad de intentar recuperarse
(...)

La Sala encuentra procedente la pretensión de indemnización del perjuicio moral, como lo concluyó el a quo. Sin embargo encuentra que la fijación de indemnización para los favorecidos con ella, en la suma para cada uno de ellos en ochocientos gramos oro, al valor en pesos colombianos para el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, resulta excesiva.

*Y lo considera de esa manera teniendo en cuenta los siguientes hechos antecedentes: que *) se confesó en la demanda que la paciente fue llevada a atención médica por una "afección cardíaca"; *) el diagnóstico sobre la misma paciente fue "mal estado general" y otras indicaciones y *) la muerte, según el registro de defunción fue por "fibrilación ventricular". Estos antecedentes son indicativos que la omisión administrativa, como ya se dijo, no puede imputarse como **causa** de muerte sino como **causa de pérdida de oportunidad para recuperarse**. Por lo tanto la condena impuesta en primera instancia se reducirá a la mitad, es decir la indemnización para cada uno de los favorecidos será por el valor en pesos colombianos al momento de ejecutoria de la sentencia en cuatrocientos gramos" (subrayas fuera del texto original) Cfr. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de junio de 2001, Consejera ponente, María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 13006.*

“4.1.- Perjuicios derivados de la pérdida de oportunidad respecto de la víctima directa.

Dado que el perjuicio autónomo que aquí se indemniza no deviene exactamente de la muerte del señor Pedro Nel Parra Jiménez sino de la pérdida de oportunidad que se cercenó de dicha persona para que pudiera recuperar su salud y tratar de sobrevivir, la Subsección no se pronunciará respecto de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, comoquiera que ellos derivan de la muerte de dicha persona, motivo por el cual se reconocerá, con fundamento en el principio de equidad antes mencionado, una suma genérica a cada demandante⁵, habida cuenta que casi la totalidad de ellos demostraron su interés para demandar dentro de este litigio y su consiguiente legitimación en la causa por activa dentro del mismo, tal como se indicará a continuación.

En este punto importa resaltar que si bien, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la presente providencia, el daño que se ha de indemnizar no será propiamente el que corresponde a la muerte del señor Parra Jiménez, sino el de la pérdida de oportunidad de recuperar su salud y poder sobrevivir por un tiempo adicional, no por ello se desconocerá el principio de congruencia en cuya virtud el juez en sus decisiones debe ceñirse estrictamente al petitum de la demanda o a las razones de defensa y las excepciones que invoque o alegue el demandado, porque en el presente caso una interpretación lógica y racional de la demanda permite advertir con claridad que la causa petendi no se circunscribió exclusivamente a identificar el hecho dañoso con la muerte de esa persona, sino que también se expuso, como configurativo del mismo, la omisión o la abstención del personal médico y de enfermería del INPEC que se encontraban en la obligación legal de otorgarle al paciente la asistencia médica correspondiente⁶, inacción que, precisamente, equivale a la negación de la

⁵ Así lo determinó la Sala, dentro del mencionado fallo de agosto 11 de 2010, acogida y reiterada por esta Subsección, mediante sentencia de 7 de julio de 2011, exp. 20.139

⁶ En relación con este punto, en la demanda se señaló:

"El herido PEDRO NEL PARRA JIMENEZ, fue recibido en la Cárcel del Distrito Judicial Modelo de Santa Fe de Bogotá y no se le dio el tratamiento, que como humano debió recibir en las condiciones de herido en que fue dado de alta en dicha prisión ()

".....

(...) cuando ya lo vieron casi agonizante, ahí si decidieron trasladarlo al hospital San Juan de Dios (...).

oportunidad que se ha venido destacando, de lo cual se infiere sin dificultad alguna que sobre esa base fáctica se encuentran edificadas las pretensiones de la demanda, que la Sala aquí acogerá en punto de la aludida pérdida de oportunidad.

*Ahora bien, el grupo familiar demandante está integrado por la madre, las hijas, los hermanos y la compañera permanente del señor Pedro Nel Parra Jiménez y para acreditar el parentesco con dicha persona se allegaron al proceso los siguientes documentos: **i)** certificado del registro civil de nacimiento del señor Pedro Nel Parra Jiménez (fl. 6 c 1), a través del cual se acredita que era hijo de la demandante María Adelina Jiménez; **ii)** copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Paola Andrea y Claudia Marcela Parra Forero, los cuales demuestran que son hijas de la víctima directa del daño (fls. 2 y 3 c 1); **iii)** también se aportaron el certificado del registro civil de nacimiento de José Arnulfo Parra Jiménez (fl. 5 c 1) y la copia autenticada del registro civil de nacimiento de Luis Alejandro Parra Jiménez (fl. 7 c 1), documentos éstos que acreditan la condición de hermanos de los aludidos actores y el señor Pedro Nel Parra Jiménez.*

Por consiguiente, se reconocerá para cada una de las hijas y a la madre de la víctima directa, un monto equivalente a cincuenta (50) S.M.L.M.V., y para cada uno de los hermanos, veinticinco (25) S.M.L.M.V., por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad.”

2.2.2. EL DAÑO INMATERIAL:

2.2.2.1. EL DAÑO MORAL:

PERJUICIOS MORALES DERIVADOS DEL DAÑO POR LA PERDIDA DE OPORTUNIDAD:

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la concurrencia de los perjuicios ocasionados por la pérdida de oportunidad, y la aflicción, angustia y congoja que en el plano moral les generó la pérdida de oportunidad.

En el fallo cuyos apartes se transcribieron en precedencia señaló:

Hubo fallas también en la prestación del servicio oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que recibió al detenido PEDRO NEL PARRA JIMENEZ en la Cárcel Distrital Modelo de Santa Fe de Bogotá y fue descuidado en su salud hasta cuando lo vieron agonizante, dispusieron su evacuación al Hospital san Juan de Dios”

“4.2.- Perjuicios morales.

Su procedencia fue aceptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el plurimencionado fallo de agosto 11 de 2010 y también por la Subsección A de dicha Sección en reciente pronunciamiento⁷, en los siguientes términos:

“En cuanto corresponde a esta clase perjuicios, dado que ninguna incompatibilidad existe entre el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el daño autónomo consistente en la pérdida de oportunidad que aquí se ha detallado y la aflicción, angustia y congoja que en el plano puramente moral o inmaterial les generó la mencionada pérdida de oportunidad –que no los perjuicios morales por la muerte de la víctima directa– se hará un reconocimiento por este específico concepto (...).”

*Por lo tanto, se reconocerá a cada uno de los anteriores demandantes, la indemnización por este rubro, así: **i)** a favor de la madre, hijas y compañera permanente de la víctima, un monto equivalente a treinta (30) S.M.L.M.V., y **ii)** para cada uno de los hermanos, quince (15) S.M.L.M.V.”*

2.2.3. El nexa causal entre la falla o falta de prestación del servicio, a que la administración está obligada, y **el daño**:

Todos los perjuicios que están soportando mis mandantes, son consecuencia directa de las fallas en que incurrió la entidad demandada al no brindar al señor JAIME ROMERO ARAMBURO los servicios médicos y controles necesarios para evitar el deterioro de su estado de salud estando obligado a ello; al no permitir el ingreso de los medicamentos para el control de su enfermedad, y mucho menos proporcionándoselos, configurándose así la PERDIDA DE OPORTUNIDAD O CHANCE para que el señor JAIME ROMERO ARAMBURO no se le deteriorara su estado de salud, o una vez desestabilizado en prisión, hubiese podido estabilizarlo.

En efecto, **EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)** obró en forma negligente al no brindar al señor JAIME ROMERO ARAMBURO la atención médica requerida para sus padecimientos de salud, ni atendió las recomendaciones consignadas en el Dictamen Médico Forense de Estado de Salud practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y

⁷ Sentencia de 7 de julio de 2011, exp. 20.139

Ciencias Forenses D.R. SUROCCIDENTE al señor ROMERO ARAMBURO, el día 20 de junio de 2014, el cual, en la CONCLUSION hace la siguiente recomendación:

“Sin embargo se le debe GARANTIZAR VALORACION PRIOROTARIA POR MEDICINA INTERNA. EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS MEDICAMENTOS ORDENADOS POR LOS ESPECIALISTAS TRATANTES, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO Estricto DE LOS CONTROLES MEDICOS ESTABLECIDOS POR ELLOS.”

Tampoco atendió las solicitudes del entonces abogado defensor del Sr. ROMERO ARAMBURO; todo lo cual constituye la pérdida de oportunidad para que el señor JAIME ROMERO ARAMBURO estabilizara o recuperara su salud, con su consecuencial deceso.

CAPITULO V. PRUEBAS

1. PRUEBA DOCUMENTAL:

1.1. PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA:

- 1.1.1. Copia del registro civil de nacimiento de **JAIME ROMERO ARAMBURO**.
- 1.1.2. Copia del registro civil de defunción de **JAIME ROMERO ARAMBURO**.
- 1.1.3. Copia del registro civil de nacimiento de **KAREN LIZETH ROMERO P.**
- 1.1.4. Copia del registro civil de nacimiento de **YEIMY ROMERO ARAMBURO**.
- 1.1.5. Copia del registro civil de nacimiento de **CLAUDIA PATRICIA ROMERO A.**
- 1.1.6. Copia del el Dictamen Médico Forense de Estado de Salud practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses D.R. SUROCCIDENTE al señor ROMERO ARAMBURO, el día 20 de junio de 2014 acta de incautación del vehículo aquí referenciado.
- 1.1.7. Interlocutorio 1465 del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Descongestión de Cali, del 17-09-2014 concediendo prisión domiciliaria al Sr. Jaime Romero Aramburo
- 1.1.8. Copia de tres memoriales suscritos por el Dr. PEDRO NEL MARTINEZ P., abogado defensor, en los que pone de presente la falta de atención médica a su defendido JAIME ROMERO ARAMBURO.
- 1.1.9. Poder conferido por el Sr. JAIME ROMERO ARAMBURO al Dr. PEDRO NEL MARTINEZ P., en el que pone de presente que el no permitirle el ingreso de los medicamentos ha tornado su situación de salud caótica.

1.2. PRUEBA DOCUMENTAL SOLICITADA:

Ruego oficiar a las siguientes autoridades y entidades para los fines que van a enunciarse:

1.2.1. A la Clínica Rey David de la ciudad de Cali, para que se sirva enviar con destino a este proceso, copia íntegra de la historia clínica del Sr. JAIME ROMERO ARAMBURO, quien en vida se identificó con la C.C. No. 16.989.918.

1.2.2. A CAPRECOM EPS o a la EPS que presta los servicios médicos a los internos de la Cárcel de Villa Hermosa de la ciudad de Cali para que se sirva enviar con destino a este proceso, copia íntegra de la historia clínica del Sr. JAIME ROMERO ARAMBURO, quien en vida se identificó con la C.C. No. 16.989.918.

2. PRUEBA TESTIMONIAL:

Para que depongan sobre los hechos 5 a 9, y sobre los perjuicios por pérdida de oportunidad y perjuicios morales que están soportando los demandantes, solicito que se cite a los señores, todos mayores de edad:

LUIS EDWARD PENAGOS

Dirección: CARRERA 26 No. 33 G 10 B/ALFONSO BARBERENA
CALI

MARIA TERESA PALACIOS AGUILAR

Dirección: CARRERA 26 No. 33 G 10 B/ALFONSO BARBERENA
CALI

PEDRO NEL MARINEZ P.

Dirección. CRA 3 No. 5-50
CALI

CAPITULO VI. CUANTIA

La estimo en la suma de 200 SMLMV que es el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda y que corresponde a la sumatoria de los perjuicios por pérdida de oportunidad, y los perjuicios morales para cada uno de los progenitores o para la hija del señor JAIME ROMERO ARAMBURO.

CAPITULO VII. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Por la naturaleza del asunto, por la cuantía de las pretensiones y por el lugar donde ocurrieron los hechos y omisiones, es Ud. competente para conocer del presente asunto en PRIMERA INSTANCIA, observando el procedimiento ordinario, en especial lo previsto en los artículos 140 y s.s. del C.P.A.C.A.

CAPITULO VIII. ANEXOS

Se presentan los documentos relacionados en el numeral 1.1. del CAPITULO V de la demanda, el poder para actuar, copia de ello y de la demanda para el

traslado a los demandados, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público y de la demanda para el archivo del Juzgado.

CAPITULO IX. NOTIFICACIONES

Los demandantes puede recibir notificaciones personales en la Carrera 26 No. 33 G -04 Barrio Alfonso Barberena de esta ciudad de Cali.

El Señor Ministro de Justicia, en la sede del Ministerio de Justicia en la Carrera 13 No. 52 - 95 de Bogotá D.C.; Correo electrónico notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co

El Señor Director del INPEC en la ciudad de Bogotá en la Calle 26 No. 27-48

La Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado Carrera 7 No. 75 -66 Pisos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá D.C.; Correo Electrónico

Y el suscrito apoderado, en la Secretaria del Juzgado o en la calle 7 No. 23 B -24 de la ciudad de Cali.

Atentamente,



WALBERTO PALOMINO VALENZUELA

C.C. 16.702.277 de Cali.

T.P. 60.720 del Cons. Sup. Jud.

palominoabogado@gmail.com

Cel. 316-6949561

